

La trama Acuamed desvió 40 millones de la descontaminación del río Ebre en Flix

El coste del proyecto se elevó sin justificación para compensar a FCC por otra obra. La cúpula de la empresa estatal hinchó el presupuesto con documentación falsa y obras no ejecutadas

RAÚL COSANO

La descontaminación del pantano de Flix, la mayor obra de esa índole realizada en España, se ubica en el centro de las investigaciones que realiza la Audiencia Nacional en la llamada Operación Frontino, que investiga una supuesta trama corrupta en la empresa estatal Acuamed (Agua de las Cuencas Mediterráneas). Así lo refleja el auto del juez Eloy Velasco. En el gran proyecto de la Ribera d'Ebre se aplicaría el *modus operandi* que, al parecer, era habitual en las operaciones que están ahora en tela de juicio: elevar el coste de la obra sin ninguna justificación, lo que el auto judicial determina como «fijar modificados ficticios irreales».

El objetivo fue incrementar el proyecto en 40 millones a modo de compensación a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), la empresa contratista. Hay que buscar el origen de las supuestas irregularidades de Flix en otra de las siete obras que están bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil.

El vínculo con Almería

En concreto, se trata de la desaladora de Bajo Almanzora, en Almería, donde urgió una reparación después de quedar inservible tras una inundación. La legislación vigente sostenía que el seguro de la Unión Temporal de Empresas (UTE) debía abonar los arreglos. Sin embargo, según el auto, «se aprecia una concertación entre el director general de Acuamed y los contratistas por la que, en contra de lo que decía el contrato y la legalidad, Acuamed no exige que cubra los desperfectos y pague el seguro de las empresas contratistas». Y continúa:

«Arbitra un acuerdo por el que pretende hacer pagar a la empresa pública un 40% de los mismos (los desperfectos), cuando no es responsabilidad de la administración». La piraeta no acaba ahí.

La cifra

36

millones de euros

se llegaron a incluir en los Presupuestos Generales de 2015 para cubrir la 'compensación indebida'

El 60% lo debían abonar las empresas privadas, que recuperaban la cantidad «mediante compensación», según la expresión usada por el juez Velasco en relación a la «empresa FCC». Es ahí, en calidad de obra para compensar, cuando aparece la descontaminación del pantano de Flix. Sobre esas compensaciones, Velasco sostiene que estarían «al parecer pactadas desde muy alto nivel en el Ministerio», en referencia al de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El auto del magistrado pormenoriza algunas de las presuntas irregularidades que se cometieron en el proyecto ebreense. El texto culpabiliza directamente a la cúpula de Acuamed: «Ante una reclamación ilegal de 30 millones de euros apoyada por los directivos de Acuamed pero negada por los técnicos, se pretenden cambios de certificaciones para retirar penalizaciones y pasar de una facturación aproxima-



Trabajos de limpieza de los lodos contaminados en el Ebre a su paso por Flix. La

damente debida de 3,5 millones, a 40 ficticios».

Es ahí donde se denuncia el sobrecoste, urdido de la siguiente manera, siempre según el auto: «Certificando unidades de obra no ejecutadas en expedientes paralelos, creándolos para meter conceptos extraordinarios que no existían, con documentación falsa pretendiendo justificar unos conceptos por otros». El resultado es una «convalidación del gasto de 32 millones» y, además, una obra añadida, definida por Velasco como «un proyecto comple-

Acuamed 'usó' Flix para compensar a FCC por las pérdidas por la inundación de una desaladora

mentario», que acabó «causando un perjuicio a la administración de 40 millones de euros para compensar a FCC».

El texto judicial vuelve a aludir a que la estratagema investigada se hilvanaba desde las altas esferas, ya que todos los procedimientos denunciados en el proyecto del embalse de Flix y la compensación planificada se hicieron «siguiendo instrucciones emanadas desde la Superioridad».

Toda la trama tarraconense de Acuamed ha dejado su huella, al menos, en los presupuestos de 2015 y 2016. Para llegar a eso, el auto expone los conflictos que hubo en el proceso de la compensación en la desaladora almeriense. «Como consecuencia de la oposición de ciertos funcionarios a permitir tales irregularidades, la desaladora sigue sin arreglar y la empresa sin permitir la liquidación de ese contrato pretendiendo que los aproximadamente dos millones de euros que podría deberse se conviertan en diez, con un perjuicio para la administración de ocho millones».

Fue entonces cuando se quiso «rellenar» a nivel presupuestario ese 'agujero', según sostiene el juez. «Los presupuestos generales del Estado en 2015 preveían cubrir esa 'compensación indebida' pactada entre la cúpula de

DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS

La investigación apunta al subsecretario de Presidencia, 'número 3' de Soraya

■ El exsecretario de Estado de Medio Ambiente y actual subsecretario de Presidencia del Gobierno, Federico Ramos de Armas, participó en la presunta reunión con FCC en la que se pactó una «compensación indebida» de 40 millones a la constructora que luego se consignó en los presupuestos de 2015. Ramos es el 'número tres' y persona de confianza de la vicepresidente del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría. Según fuentes jurídicas, testigos ex empleados de Acuamed, varios de ellos ingenieros, afirmaron al juez que esa reunión se celebró en el Ministerio de Agricultura y que a ella acudió Ramos. En ella se acordó supuestamente con FCC una compensación ilegal de 40 millones, que se



Federico Ramos, exsecretario de Estado de Medio Ambiente.

consignó en una partida en los presupuestos para 2015.

Siempre según los testigos, Federico Ramos de Armas, que

ocupó esas responsabilidades de diciembre de 2011 a junio de 2015, cuando se incorporó al equipo de Sáenz de Santamaría, tuvo una actuación determinante también para apartar del cargo, en la primavera de 2014, al alto funcionario de Acuamed que trataba de destapar la trama corrupta, el director de Ingeniería y Obras, Francisco Valiente.

La denuncia interna de Valiente al consejo de administración sobre los enjuagues en el ente con las constructoras para hinchar los contratos fue archivada con la supuesta aquiescencia de Ramos, entonces presidente de Acuamed, que dio luz verde al despido de Valiente, poco antes de que en septiembre de 2014 éste cursara la denuncia a Anticorrupción.